TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de
dos mil veinticuatro (2024).

Ref: Liquidación de sociedad conyugal de
María Margarita Neira Álvarez c/. Delfín
Cuervo Bustos. Exp. 25386-31-84-001-
2021-00273-01.

Sería del caso entrar a proveer sobre el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra el auto de 5 de enero de 2024, por el cual dijo el juzgado promiscuo de familia de La Mesa consolidar los activos y pasivos dentro de la liquidación de la sociedad conyugal; mas, obsérvase, ello no procede, pues dicha decisión, teniendo en cuenta las actuaciones que la antecedieron, dejan ver que es prematura, lo que impide proveer en esos términos, como a continuación pasa a explicarse:

Ciertamente, en la diligencia de inventarios y avalúos que se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2022, corrido el traslado de las partidas inventariadas por la demandada, el demandado objetó la inclusión de algunas de ellas, cumplidamente la de los inmuebles identificados con folio de matrícula inmobiliaria 166-26395 y 166-101793, sobre la base de que no deben hacer parte por haber sido adquiridos con posterioridad a la separación de cuerpos, 166-101784 aduciendo que dicho bien lo recibió por herencia de su progenitora María Zoila Bustos de Cuervo, respecto de los bienes 166-3906 y 166-395035 porque frente a ellos se reclaman mejoras, pero no se indican en qué consistieron, ni cuál su valor, al paso que los bienes 166-26288, 166-26287 y 166-37386 no fueron mejorados para que pueda ser incluido su mayor valor y tampoco existen cabezas de ganado; así mismo, objetó el avalúo del inmueble 051-253140 y de los dos vehículos inventarios como parte del activo y la inclusión de

los pasivos por no tratarse de deudas sociales y solicitó tener en cuenta como compensación a favor de la sociedad conyugal y contra la demandante el valor de la venta que hizo de los inmuebles 50C-1698289 y 50C-1698397 y los valores cancelados a título de impuestos de los bienes sociales desde el 2019 e imponer la sanción a que alude el artículo 1824 del código civil por su intención de distraer del haber el bien 50C-1797792.

En la citada diligencia a vuelta de correr traslado de esas objeciones, se abrió a pruebas el incidente correspondiente y luego de practicadas éstas en la diligencia de 8 de noviembre pasado, advirtió que repasaría el contenido de todas las audiencias que se surtieron con las diferentes precisiones que había hecho para efectos de determinar qué bienes y pasivos ingresarían al haber de la sociedad conyugal, lo que finalmente hizo en el proveído apelado sin ninguna consideración relativamente a las objeciones.

Opina sin embargo el Tribunal que esta no es ni con mucho una manera adecuada de llevar una diligencia de este tipo, porque los estadios que determina el legislador para tramitarlas está bien fijado en la ley; véase, en efecto, que lo que dice el precepto 501 del código general del proceso es que *“[p]ara resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y avalúos o sobre la inclusión o exclusión de bienes o deudas sociales, el juez suspenderá la audiencia y ordenará la práctica de las pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere, las cuales se practicarán en su continuación. En la misma decisión señalará fecha y hora para continuar la audiencia y advertirá a las partes que deben presentar las pruebas documentales y los dictámenes sobre el valor de los bienes, con antelación no inferior a cinco (5) días a la fecha señalada para reanudar la audiencia, término durante el cual se mantendrán en secretaría a disposición de las partes”* y que en la *“continuación de la audiencia se oirá a los testigos y a los peritos que hayan sido citados, y el juez resolverá de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas. Si no se presentan los avalúos en la oportunidad señalada en el inciso*

anterior, el juez promediará los valores que hubieren sido estimados por los interesados, sin que excedan el doble del avalúo catastral”, apartes normativos que, analizados de forma sistemática, permiten concluir que en esa facción de inventarios y avalúos cuando hay desacuerdo entre los interesados, resulta perentorio para el juzgador abrir a pruebas la objeción y practicadas éstas, ahí sí entrar a ponderar lo relativo a las objeciones que fueron planteadas.

Y si se repasa el contenido de ese proveído de 5 de enero pasado, lo que queda pronto al descubierto es que las objeciones no han sido desatadas por la juzgadora de primer grado, pues es claro que esas elucidaciones que inexplicablemente pudo haber dado en diferentes momentos de las audiencias de apertura y práctica de pruebas, a sabiendas de que esas motivaciones del juez están reservadas para el momento de fallar los incidentes o el proceso, so pena de incurrir en prejuizgamientos, no comportan verdaderamente su resolución, por supuesto que es al momento de desatar el incidente que debe dejar en claro cuáles son las razones de su decisión.

Es que no debe perderse de vista que, “[v]arios principios y derechos en los regímenes democráticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial [y en general las decisiones judiciales]: *el de publicidad porque asegura la contradicción del fallo y muestra la transparencia con que actúan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisión no habrá motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas válidamente recaudadas; los de seguridad jurídica y confianza legítima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional*”; de ahí, pues, que el “*deber de motivar toda providencia que no tenga por única finalidad impulsar el trámite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicción haga públicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resolución, de tal manera*

que tras conocerse las se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del análisis objetivo, amén de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso” (Cas. Civ. Sent. de 30 de abril de 2021, exp. STC4683-2021), algo que difícilmente puede tenerse por cumplido en este caso, en el que no existe absolutamente ninguna consideración por parte del juzgado acerca del porqué es que esos bienes y derechos que enlistó en el proveído apelado deben hacer parte del inventario pese a la protesta que frente a ellos hizo el demandado, a sabiendas de que la suerte de esas controversias que planteó al objetar cada partida debía definirse, sin más preámbulos, al momento de confeccionarlo.

Lo anterior es suficiente para concluir que el proceso no está debidamente aparejado, algo que, por supuesto, no puede pasar inadvertido la Corporación, por lo que habrá de disponerse la devolución del expediente para que el juzgador de instancia adopte las medidas que sean del caso.

Por lo expuesto se resuelve:

Devuélvase el expediente al juzgado de origen para que proceda de conformidad con lo expuesto en este proveído, esto es, a desatar la totalidad de las objeciones que fueron formuladas en la diligencia de inventarios y avalúos celebrada el 28 de septiembre de 2022, previo a confeccionar el respectivo catálogo de activos y pasivos.

Así mismo, para que proceda a organizar el expediente garantizando su coherencia y completitud; en efecto, nótese que aparecen intercaladas piezas procesales del trámite de cesación de efectos civiles de matrimonio católico que se adelantó entre las partes con las actuaciones de la fase liquidatoria sin llevar un orden lógico, las que además se encuentran incompletas, desde que se echan de ver, por citar algunas, el auto admisorio del trámite

liquidatorio y las actas de inventarios que en la citada diligencia se dijo fueron aportadas por los interesados.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

German Octavio Rodriguez Velasquez

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 004 Civil Familia

Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **efec048ca3d2bc073b63d31ad6403499f14e5c6743ed17942bf5b601ef5a89cd**

Documento generado en 29/02/2024 08:16:28 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>